

**10.-** Que por escrito y anexos recibidos en la Oficialía de Partes de esta Sala Regional el día 07 de agosto de 2018, compareció el C. \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*, en representación legal de \*\*\*\*\* \*\* \*, a demandar la nulidad de la resolución contenida

2.....

en el oficio \*\*\*\*\* de fecha 28 de junio de 2018, emitida por el Director de Administración del Agua del Organismo de Cuenca Noroeste de la Comisión Nacional del Agua, en Hermosillo, Sonora, mediante la cual le impone una multa por la cantidad de \$191,085.00 (CIENTO NOVENTA Y UN MIL OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.).

**2°.-** En auto de 10 de agosto de 2018 (**folio 52**), se admitió a trámite la demanda, ordenándose correr traslado a la autoridad demandada con la copia simple exhibida y anexos para que la contestara dentro del término de ley; compareciendo al efecto, la Directora de Asuntos Jurídicos del Organismo de Cuenca Noroeste de la Comisión Nacional del Agua, mediante oficio de fecha 11 de septiembre de 2018 (**folio 59**) a través del cual **se allanó a las pretensiones de la parte actora.**

**3°.-** Mediante proveído de 17 de septiembre de 2018 (**folio 106**) se tuvo por contestada la demanda, misma que quedó a disposición de la parte actora para los efectos legales correspondientes; además, se proveyó sobre la correcta integración del expediente en términos de lo dispuesto en el artículo 58-5 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo; en suma a lo anterior, se fijó nueva fecha de cierre de instrucción, informándose a las partes que tenían hasta ese día que se fijó para que formularan los alegatos por escrito respectivos, por lo que transcurrido dicho plazo quedó cerrada la instrucción, en términos de lo previsto en el artículo 58-12 segundo párrafo de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

#### **C O N S I D E R A N D O:**

**PRIMERO.-** Esta Instrucción, es competente para resolver el juicio de nulidad en que se actúa, por así disponerlo los artículos, 58-13 de la

PARTE ACTORA:

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

3.....

Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, 3, fracción II, 29, 30, 31 y 36, fracción VIII y demás relativos de Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; en relación con lo previsto en los artículos 21, fracción II y 22, fracción II, del Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, aplicable al presente juicio de conformidad con el tercer párrafo, del Quinto transitorio de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa publicada el 18 de julio de 2016 en el Diario Oficial de la Federación.

**SEGUNDO.-** La existencia de la resolución impugnada se encuentra acreditada en los términos de los artículos 46, fracción I de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, ya que la parte actora la exhibió junto con su escrito de demanda, la cual fue plenamente reconocida por la autoridad al formular su contestación de demanda.

**TERCERO.-** Por cuestión de técnica jurídica y atendiendo al **principio de mayor beneficio para el gobernado**, de conformidad con lo establecido en el artículo 50, segundo párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que establece los lineamientos a seguir en el estudio de los agravios debiendo examinarse prima facie aquellos que puedan llevar a declarar la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada; esta juzgadora procede al estudio del primer concepto de impugnación de la demanda. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia cuyo rubro y contenido es el siguiente:

*Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito*

*Jurisprudencia*

*Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*

*XXX, Agosto de 2009*

*Materia(s): Administrativa*

*Tesis: XVI.1o.A.T. J/9*

*Página: 1275*

**CONCEPTOS DE ANULACIÓN EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. ES PREFERENTE EL ESTUDIO DE AQUELLOS QUE CONDUZCAN A DECLARAR LA NULIDAD LISA Y LLANA DEL ACTO IMPUGNADO POR REPRESENTAR UN MAYOR BENEFICIO PARA EL ACTOR (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO).**

*El artículo 17 constitucional consagra la garantía de acceso a la impartición de justicia, la cual se encuentra encaminada a asegurar que las autoridades -órganos judiciales o materialmente jurisdiccionales- lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, por lo que uno de los principios que consagra dicha garantía es el de exhaustividad, entendiéndose por tal la obligación de los tribunales de resolver todas las cuestiones sometidas a su conocimiento, sin que les sea lícito dejar de pronunciarse sobre alguna. Por su parte, los numerales 87 y 89, fracción I, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, establecen la existencia de dos requisitos que deben observarse en el dictado de las resoluciones: el de congruencia y el de exhaustividad. Ahora, si bien es cierto que en la citada ley no existe una disposición expresa que establezca el orden en que deben analizarse los conceptos de anulación, también lo es que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado se encuentra constreñido a ocuparse de todos los motivos de impugnación en que descansa la pretensión anulatoria del actor, y preferentemente de los orientados a declarar la nulidad lisa y llana del acto impugnado, ya que de resultar fundados se producirá un mayor beneficio jurídico para el actor, pues se eliminarán en su totalidad los efectos del acto administrativo, con lo que se respeta la garantía de acceso efectivo a la justicia y, en particular, el principio de completitud que ésta encierra.*

**PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO.**

*Amparo directo 61/2006. Martha Leticia Aguirre Vaca. 19 de mayo de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Lorenzo Palma Hidalgo. Secretario: Juan Antonio Gutiérrez Gaytán.*

*Amparo directo 355/2006. \*\*\*\*\* . 5 de enero de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Lorenzo Palma Hidalgo. Secretaria: Angélica María Merino Cisneros.*

*Amparo directo 490/2007. Juan Manuel Araujo Betanzos. 6 de mayo de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Lorenzo Palma Hidalgo. Secretario: Enrique Zamora Camarena.*

*Amparo directo 214/2008. Orlando Mariano Navarro Calderón. 17 de octubre de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Manuel Estrada Jungo. Secretario: José Juan Múzquiz Gómez.*

*Amparo directo 33/2008. Ma. de Lourdes Yáñez Mondragón y otras. 11 de diciembre de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: José Juan Múzquiz Gómez, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera*

**PARTE ACTORA:**

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**5.....**

*Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretario: Rogelio Zamora Menchaca.”*

La demandante sostiene en el **primer** concepto de impugnación que la autoridad fue omisa en aplicar lo dispuesto en los artículos 60 y 74 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo en relación a la resolución que se combate, pues la autoridad debió emitir una en la que decretara la caducidad de la instancia, ya que en el caso, al haber quedado notificada del inicio del procedimiento de imposición de sanciones con fecha 25 de febrero de 2016, en donde se le concedieron 15 días para hacer valer su derecho y ofrecer pruebas, lo cual no hizo así, por lo que al haber fenecido dicho término el 18 de marzo de 2016, empezó a correr con fecha 22 de marzo del mismo mes y año a que se refiere el artículo 74 antes mencionado, el cual venció el día 11 de abril de 2016 y al no haberse dictado la citada resolución en el procedimiento de mérito, es que empezó a correr el término de caducidad a que se refiere la parte final del artículo 60 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, por ello, transcurrió el término de referencia y fenecido el 27 de mayo de 2016, es que operó la caducidad del procedimiento a la fecha en que se dictó la resolución, esto es, al día 28 de junio de 2018.

Por su parte, la representación jurídica de la autoridad demandada, optó por allanarse a las pretensiones de su contraparte, en lo atinente al concepto de impugnación en estudio.

Una vez precisado lo anterior, este Juzgador estima procedente la declaratoria de nulidad lisa y llana de la resolución impugnada, por los motivos y razonamientos que a continuación se expresan:

Como ya quedó visto, la autoridad demandada, al contestar la demanda se allanó a la pretensión de la actora, reconociendo expresamente que el acto impugnado en el presente juicio debe anularse conforme a lo establecido en los artículos 51, fracción IV y 52, fracción II de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Lo anterior, fue realizado de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 22, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo vigente, el cual, dispone lo siguiente que se transcribe:

***“Artículo 22, LFPCA.- (...)***

***En la contestación de demanda, o hasta antes del cierre de la instrucción, la autoridad demandada podrá allanarse a las pretensiones del demandante o revocar la resolución impugnada.”***

Como se desprende del precepto preinserto, en la contestación de demanda, la autoridad demandada podrá allanarse a las pretensiones del demandante, lo que en la especie sucedió, tal y como puede corroborarse del contenido del oficio de contestación de demanda de fecha 11 de septiembre de 2018, **visible a folios números 59 a 63 autos.**

En esa tesitura, el allanamiento es el acto que expresa la voluntad de la autoridad de reconocer en forma total o parcial que la pretensión del actor es acertada, por lo que el hecho de aceptar expresamente que el acto controvertido es ilegal, **ello trae como consecuencia que se dé por terminado el conflicto, y en ese contexto, procede declarar la nulidad de la resolución impugnada.**

Lo anterior tiene idóneo sustento en el siguiente criterio Jurisprudencial que a continuación se transcribe:

***“VII-J-1aS-112***

***ALLANAMIENTO DE LA AUTORIDAD AL CONTESTAR LA DEMANDA.- SI SE REALIZA SOBRE LA PRETENSIÓN DE LA ACTORA ENCAMINADA A OBTENER LA NULIDAD, ES PROCEDENTE***

**PARTE ACTORA:**

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

7.....

**DECLARAR ÉSTA.-** El allanamiento es el acto que expresa la voluntad de la autoridad de reconocer en forma total o parcial que la pretensión del actor es acertada, por lo que el hecho de aceptar expresamente que el acto controvertido es ilegal, **trae como consecuencia que se dé por terminado el conflicto, por lo que procede declarar la nulidad de la resolución impugnada.**

(Tesis de jurisprudencia aprobada por acuerdo G/S1-27/2014)

**PRECEDENTES:**

V-P-1aS-76

Juicio No. 1757/99-11-11-1/170/99-S1-01-04.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Fiscal de la Federación, en sesión de 20 de junio de 2000, por unanimidad de 5 votos.- Magistrado Ponente: Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez.- Secretaria: Lic. Martha Elizabeth Ibarra Navarrete.

(Tesis aprobada en sesión de 11 de octubre de 2001)  
R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año II. No. 16. Abril 2002. p. 43  
Fe de Erratas R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año II. No. 19. Julio 2002. p. 257

V-P-1aS-257

Juicio No. 24023/03-17-05-5/471/04-S1-05-04.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 8 de febrero de 2005, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrado Ponente: Alejandro Sánchez Hernández.- Secretario: Lic. Andrés Enrique Sánchez Drasdo y Albuerne.  
(Tesis aprobada en sesión de 8 de febrero de 2005)  
R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año V. No. 53. Mayo 2005. p. 55

V-P-1aS-334

Juicio Contencioso Administrativo No. 2670/05-09-01-4/568/06-S1-04-03.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 26 de septiembre de 2006, por unanimidad de 5 votos.- Magistrado Ponente: Jorge Alberto García Cáceres.- Secretario: Lic. Francisco Enrique Valdovinos Elizalde.  
(Tesis aprobada en sesión de 26 de septiembre de 2006)  
R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año VII. Tomo II. No. 73. Enero 2007. p. 849

VI-P-1aS-477

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 14721/06-17-02-9/ac1/1518/10-S1-05-03.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 7 de julio de 2011, por unanimidad de 4 votos a favor.- Magistrado Ponente: Juan Ángel Chávez Ramírez.- Secretario: Lic. Francisco Enrique Valdovinos Elizalde.

(Tesis aprobada en sesión de 7 de julio de 2011)  
R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año I. No. 2. Septiembre 2011. p. 34

VII-P-1aS-928

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 3472/13-17-03-10/5/14-S1-01-04.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 24 de abril de 2014, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrado Ponente: Alejandro Sánchez Hernández.- Secretaria: Lic. María Vianey Palomares Guadarrama.  
(Tesis aprobada en sesión de 24 de abril de 2014)  
R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año IV. No. 35. Junio 2014. p. 186  
Así lo acordó la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión celebrada el veintiuno de agosto de dos mil catorce.- Firman la Magistrada Nora Elizabeth Urby Genel, Presidenta de la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y la Licenciada María del

*Consuelo Hernández Márquez, Secretaria Adjunta de Acuerdos, quien da fe.*

*R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año IV. No. 38. Septiembre 2014. p. 67*

Asimismo, el suscrito Magistrado considera fundada la causa de ilegalidad hecha valer por el demandante, en el que sostiene que en el caso operó la caducidad del procedimiento instaurado en contra de la demandante, en mérito de las consideraciones que se precisan a continuación.

Sobre el particular, el artículo 60, de la de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, prevé la caducidad de los procedimientos de las autoridades pertenecientes a la Administración Pública Federal, el cual establece lo siguiente:

**“Artículo 60.-** *En los procedimientos iniciados a instancia del interesado, cuando se produzca su paralización por causas imputables al mismo, la Administración Pública Federal le advertirá que, transcurridos tres meses, se producirá la caducidad del mismo. Expirado dicho plazo sin que el interesado requerido realice las actividades necesarias para reanudar la tramitación, la Administración Pública Federal acordará el archivo de las actuaciones, notificándoselo al interesado. Contra la resolución que declare la caducidad procederá el recurso previsto en la presente ley.*

*La caducidad no producirá por sí misma la prescripción de las acciones del particular, de la Administración Pública Federal, pero los procedimientos caducados no interrumpen ni suspenden el plazo de prescripción.*

*Cuando se trate de procedimientos iniciados de oficio se entenderán caducados, y se procederá al archivo de las actuaciones, a solicitud de parte interesada o de oficio, en el plazo de 30 días contados a partir de la expiración del plazo para dictar resolución.”*

De la transcripción anterior se advierte que, el artículo 60, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, prevé la caducidad del procedimiento administrativo en dos supuestos distintos, consistentes en:

**1.- En procedimientos iniciados a instancia del interesado.** En estos supuestos, se producirá la caducidad del procedimiento, cuando se produzca su paralización por causas imputables al interesado, en cuyo caso la autoridad correspondiente le advertirá que, transcurridos 3 meses se producirá la caducidad



**PARTE ACTORA:**

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

9.....

del mismo y expirado dicho plazo sin que el interesado requerido realice las actividades necesarias para reanudar la tramitación, la autoridad acordará el archivo de las actuaciones, notificándoselo al interesado.

**2.- En procedimientos iniciados de oficio.** En estos casos, la caducidad del procedimiento se configura por inactividad en el plazo de 30 días contados a partir de la expiración del plazo para dictar resolución, y el archivo de las actuaciones procederá de oficio. Así pues, la caducidad opera ipso jure, por el simple transcurso del tiempo.

En la especie, de las documentales que obran en autos, se advierte que tal y como señala la representante jurídica de la autoridad demandada, la autoridad llevó a cabo dos procedimientos, el primero de visita **de inspección**, y el diverso **de imposición de sanciones**, mismos que fueron iniciados **de oficio**.

Así es, en la especie se tiene que con la resolución contenida en el oficio número \*\*\*\*\*, de fecha 28 de junio de 2018, **visible a folio número 09 de autos**, la autoridad resolvió el procedimiento sancionador incoado a la hoy actora, teniendo como único antecedente y origen, el diverso oficio de inicio de procedimiento de fecha **27 de enero de 2016 y notificado el 25 de febrero de 2016** (véase folio 96), en el cual se le concedió a la particular un plazo de quince días hábiles para que presentara pruebas y defensas que estimara pertinentes, en términos del artículo 72 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Ahora, el referido plazo de quince días inició el siguiente día en que surtió efectos la notificación antes mencionada en términos del artículo 38 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo (el cual alude a que las notificaciones personales surtirán sus efectos el mismo día en que se practican, tal como sucedió

en la especie), esto es, el **26 de febrero de 2016 y feneció el 17 de marzo siguiente**, al descontarse los días inhábiles 27 y 28 de febrero, 05, 06, 12 y 13 de marzo de 2016 por corresponder a sábados y domingos.

Entonces, a partir del **18 de marzo de 2016**, inició el plazo de diez días a que alude el artículo 74 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo para dictar la resolución correspondiente en el procedimiento administrativo, mismo que feneció el **05 de abril de 2016**, al considerarse como inhábiles los días 19, 20, 26 y 27 de marzo, 02 y 03 de abril de 2016, por corresponder a sábados y domingos, así como los días 21, 24 y 25 de marzo de 2016, al haber sido declarados inhábiles mediante *“ACUERDO por el que se hace del conocimiento del público en general los días del mes de diciembre de 2015 y los del año 2016, que serán considerados como inhábiles para efectos de los actos y procedimientos administrativos substanciados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y sus órganos administrativos desconcentrados.”*, publicado en Diario Oficial de la Federación el 18 de diciembre de 2015.

Luego, el plazo de treinta días a que hace referencia el artículo 60 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el cual fue previamente transcrito, es evidente que transcurrió en exceso a la fecha en que se dictó la resolución en el procedimiento administrativo, pues esta fue emitida el día **28 de junio de 2018 y notificada el 29 siguiente, esto es, más de 2 años después de la fecha en que feneció el plazo de 10 días para emitir la resolución correspondiente en términos del artículo 74 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, operando por consecuencia, la caducidad del mencionado procedimiento administrativo instaurado en contra de la hoy enjuiciante, hecho por demás evidente que la defensa jurídica de la autoridad demandada, optó por allanarse en relación a dicho concepto de impugnación.**

PARTE ACTORA:

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

11.....

En consecuencia, lo procedente en la especie es declarar la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada, al derivar de un procedimiento llevado a cabo ilegalmente, por lo que la misma es fruto de un acto viciado de origen.

Es aplicable en lo conducente la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de la Séptima Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación, página 280; cuyo rubro y texto, establecen:

**“ACTOS VICIADOS, FRUTOS DE.** Si un acto o diligencia de la autoridad está viciado y resulta inconstitucional, todos los actos derivados de él, o que se apoyen en él, o que en alguna forma estén condicionados por él, resultan también inconstitucionales por su origen, y los tribunales no deben darles valor legal, ya que de hacerlo, por una parte alentarían prácticas viciosas, cuyos frutos serían aprovechables por quienes las realizan y, por otra parte, los tribunales se harían en alguna forma partícipes de tal conducta irregular, al otorgar a tales actos valor legal.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA  
DEL PRIMER CIRCUITO.

Séptima Época, Sexta Parte:

Volumen 82, página 16. Amparo directo 504/75. Montacargas de México, S.A. 8 de octubre de 1975. Unanimidad de votos Ponente: Guillermo Guzmán Orozco.

Volúmenes 121-126, página 246. Amparo directo 547/75. José Cobo Gómez y Carlos González Blanquel. 20 de enero de 1976. Unanimidad de votos. La publicación no menciona el nombre del ponente.

Volúmenes 121-126, página 246. Amparo directo 651/75. Alfombras Mohawk de México, S.A. de C.V. 17 de febrero de 1976. Unanimidad de votos. La publicación no menciona el nombre del ponente.

Volúmenes 121-126, página 246. Amparo directo 54/76. Productos Metálicos de Baja California, S.A. 23 de marzo de 1976. Unanimidad de votos. La publicación no menciona el nombre del ponente.

Volúmenes 121-126, página 14. Amparo directo 301/78. Refaccionaria Maya, S.A. 18 de enero de 1979. Unanimidad de votos. La publicación no menciona el nombre del ponente.

Nota: Por ejecutoria de fecha 17 de enero de 2007, la Primera Sala declaró improcedente la contradicción de tesis 75/2004-PS en que participó el presente criterio.”

**CUARTO.-** En atención a la conclusión alcanzada en este fallo, este Juzgador se abstiene de entrar al estudio y análisis de los restantes conceptos de impugnación, toda vez que cualesquiera que fuera el resultado de los mismos, no se variaría el sentido del presente fallo.

Al respecto es aplicable la Jurisprudencia cuyo tenor literal es el siguiente:

*Novena Época  
No. Registro: 193430  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta X, Agosto de 1999  
Materia(s): Administrativa  
Tesis: I.2o.A. J/23  
Página: 647:*

**CONCEPTOS DE ANULACIÓN. LA EXIGENCIA DE EXAMINARLOS EXHAUSTIVAMENTE DEBE PONDERARSE A LA LUZ DE CADA CONTROVERSIA EN PARTICULAR.** *La exigencia de examinar exhaustivamente los conceptos de anulación en el procedimiento contencioso administrativo, debe ponderarse a la luz de cada controversia en particular, a fin de establecer el perjuicio real que a la actora puede ocasionar la falta de pronunciamiento sobre algún argumento, de manera tal que si por la naturaleza de la litis apareciera inocuo el examen de dicho argumento, pues cualquiera que fuera el resultado en nada afectaría la decisión del asunto, debe estimarse que la omisión no causa agravio y en cambio, obligar a la juzgadora a pronunciarse sobre el tema, sólo propiciaría la dilación de la justicia.*

**SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.”**

Por lo expuesto y de conformidad con lo previsto por los artículos 49, 50, 51 fracción IV, 52, fracción II y 58-13 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, este Juzgador;

## **RESUELVE:**

**I.-** La actora **probó su pretensión** en este juicio y, en consecuencia:

PARTE ACTORA:

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

13.....

II.- Se declara la nulidad de la **resolución impugnada**, contenida en precisada en el resultando *Primero* del presente fallo, de conformidad con los razonamientos expresados en el *Tercer* considerando.

III.- NOTIFÍQUESE POR BOLETÍN JURISDICCIONAL A LAS PARTES.

Así lo resolvió y firma el Magistrado Instructor de la Segunda Ponencia de la Sala Regional del Noroeste II, Licenciado **JORGE LERMA SANTILLÁN**, ante el Secretario de Acuerdos **JUAN PABLO GARCÍA LEYVA**, que da fe.

JPGL/jjlo

**MAG. JORGE LERMA SANTILLÁN.**  
Titular de la Segunda Ponencia de esta Sala Regional.

**LIC. JUAN PABLO GARCÍA LEYVA.**  
Secretario de Acuerdos.

*“El día cuatro de noviembre de dos mil veinticuatro, el Mtro. Juan Pablo García Leyva, Secretario de acuerdos con adscripción en la Sala Regional del Noroeste II del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, hago constar y certifico que en términos de lo previsto en los artículos 108, 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta versión pública suprime toda aquella información considerada legalmente como confidencial, por tratarse de nombre de persona moral, nombre de representante legal y datos relativos a la resolución impugnada. Conste.”*